

# DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: HISTORIA RECIENTE, HISTORIA VIVIDA

## *Democracy and democratization in Latin America: Recent history, lived history*

Guillermo Mira Delli-Zotti  
*Universidad de Salamanca*

Fecha de recepción: 3-9-2010; revisión: 17-9-2010; aceptación definitiva: 28-9-2010

**RESUMEN:** Este artículo identifica la instauración de la democracia y su persistencia como uno de los hechos más remarcables de la historia reciente de América Latina. Sin embargo, en la experiencia del subcontinente, democracia no aparece como sinónimo de democratización. Partiendo de las transiciones, este artículo tratará de establecer una periodización de la travesía democrática de América Latina. Simultáneamente, se estudiará la incidencia desigual que ha tenido la irrupción de la «memoria histórica» en la esfera pública de países como Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador y Guatemala, contrastando con el caso de Brasil.

*Palabras clave:* América Latina, historia reciente, democracia, memoria histórica.

**ABSTRACT:** This article identifies the restoration of the democracy and its persistence as one of the most remarkable facts of the recent history of Latin America. Nevertheless, in the experience of the subcontinent, democracy does not appear like synonymous of democratization. Starting off with the transitions, this article is led toward a periodic analysis of the so-called democratic crossing of Latin America. At the same time, it studies the unequal incidence that the impact of the «historical memory» has had in the public sphere of countries like Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador and Guatemala, contrasting with the case of Brazil.

*Keywords:* Latin America, Recent History, Democracy, Historical Memory.

INTRODUCCIÓN.

SOBRE LA DEMOCRACIA Y LA HISTORIZACIÓN DEL PASADO PRÓXIMO EN AMÉRICA LATINA

La afirmación de que el objeto de la historia no es el conocimiento del pasado sino el estudio de los hombres en el tiempo ha abierto la lente y potenciado extraordinariamente la paleta temática de los historiadores. La reflexión filosófica sobre los inextricables vínculos entre pasado, presente y futuro pero también sobre sus trastocamientos; el descubrimiento de la evocación testimonial como arma poderosa para iluminar el pasado (reciente) o la imparable irrupción memorialística —por citar algunos factores y sin afán de exhaustividad—, han orientado a los historiadores a dedicarse a periodos tradicionalmente reservados a otras disciplinas, como la sociología, la ciencia política o el periodismo<sup>1</sup>. Pero hay otras razones —que tal vez no demandan justificaciones filosóficas o disciplinares, porque son más pedestres y acuciantes— para que algunos se hayan volcado a la escritura de la *historia del presente*: en América Latina (sin pretender que sea un ejemplo excepcional), la percepción de que el subcontinente fue escenario de acontecimientos de extremada importancia y hondo dramatismo en tiempos muy cercanos (concretamente, las décadas de los sesenta y los setenta), capaces de imprimir una huella profunda y haber operado un giro radical en la historia de la región.

No es nuestro objetivo focalizar «los años turbulentos», que están recibiendo un extraordinario caudal de investigaciones, sino detenernos en lo que vino a continuación: la implantación, desenvolvimiento y estabilización de sistemas democráticos en todos los países de América Latina (con excepción de Cuba). Se trata de un fenómeno bastante llamativo: nunca antes la región había disfrutado de un periodo tan prolongado de gobierno sujeto a los protocolos mínimos de lo que se entiende por democracia<sup>2</sup>. Surge entonces la pregunta de si la espectacularidad del cambio ha estado en relación con los resultados efectivos para quienes lo han protagonizado y experimentado. En breve, si la llegada y persistencia de la democracia ha logrado combatir / abatir / erosionar / transformar / mitigar o morigerar patrones históricos que remiten a problemas estructurales como pobreza extrema, desigualdad, dependencia económica, discriminación y exclusión, violencia social o depredación medioambiental<sup>3</sup>.

1. Existen muchos y excelentes textos sobre estas cuestiones: ARÓSTEGUI, Julio: *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Madrid: Alianza, 2004; RICOEUR, Paul: *Tiempo y narración*. México: Siglo XXI, 1995, 2 vols.; CUESTA BUSTILLO, Josefina (ed.): *Memoria e Historia*. Ayer, 32, 1998; RICOEUR, Paul: *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires: FCE, 2004; JELIN, Elizabeth: *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI, 2002.

2. MAINWARING, Scott y PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal: «Nivel de desarrollo y democracia: el excepcionalismo latinoamericano (1945-1996)», *América Latina Hoy*, 36, 2004, pp. 189-248.

3. Un estudio pionero que identifica con energía los «problemas estructurales» del subcontinente es STEIN, Stanley y STEIN, Barbara H.: *La herencia colonial de América Latina*. México: Siglo XXI, 1970. Para una amplia y muy equilibrada panorámica sobre la economía de América Latina: BULMER-THOMAS, Víctor: *La historia económica de América Latina desde la independencia*. México: FCE, 1998.

Nuestra hipótesis es doble. En primer lugar, sostenemos que las transformaciones de fondo han sido excesivamente modestas: las transiciones a la democracia en América Latina no han venido acompañadas por genuinos procesos de democratización —salvo en el caso de Brasil y por motivos que no tienen estrictamente que ver con lo que identificamos como «transición política»—. Sólo en los últimos años parecen abrirse genuinas perspectivas de cambio y eso como consecuencia de la insatisfacción de la ciudadanía con las políticas y los políticos de la democracia.

En segundo lugar, que las memorias sobre el pasado traumático (dictatorial, de represión y también de evocación de la etapa pre-autoritaria) están operando cambios en la esfera pública, aunque sus repercusiones no están siendo unívocas en lo político. Nuevamente aquí Brasil parece erigirse como excepción: el olvido o la indiferencia sobre los 21 años de dictadura militar (1964-1985) no parecen haber sido obstáculo a los tangibles progresos del país en el camino hacia la democratización, contrastando con otros países de la región donde una memoria crítica y muy militante no abona, sin embargo, la intuición de que a más memoria —como insumo para una conciencia crítica sobre el pasado y una interpelación del presente—, mayor calidad o consolidación democrática.

#### 1. SOBRE RENDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA DEMOCRACIA: CUATRO DIAGNÓSTICOS

En los últimos años, la preocupación por los rendimientos y los resultados del ejercicio de la democracia en América Latina se ha convertido en una cuestión de gran relevancia para sociólogos y politólogos, cuestión que, además, entraña una curiosa contradicción: el periodo más largo de estabilidad democrática en el subcontinente está coronado por una muy baja calidad institucional del sistema y magros resultados económicos, que se reflejan en el escaso entusiasmo que la democracia despierta entre la población<sup>4</sup>. Analistas y expertos de muy distintos campos e ideologías coinciden en trazar un panorama preocupante —cuando no sombrío— no sólo en cuanto al desempeño de la democracia sino de cara al porvenir de los países latinoamericanos en general.

Según Enrique Krauze, los paradigmas del atraso latinoamericano habrían sido cuatro: militarismo, marxismo revolucionario, populismo y un modelo de economía estatalizada y cerrada. Pese a saludar el «milagro de 1989» (la caída del muro de Berlín, la implosión de la URSS y la instalación de la utopía neoliberal) como el triunfo de la democracia liberal sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis este autor reconoce que, transcurrido un tiempo razonable, el éxito no ha sido ni

4. Las insuficiencias y los «déficits democráticos» advertidos por la población están recogidos en el *Informe del PNUD*, «La democracia en América Latina», 2004. En cuanto a la forma para medir la «calidad» de una democracia, remitimos al trabajo de MORLINO, Leonardo: *Democracias y democratizaciones*. Madrid: CIS, 2009.

mucho menos definitivo. Los paradigmas del atraso cabalgan de nuevo, algunos de ellos travestidos: el marxismo revolucionario ha sido sustituido por el indigenismo, el populismo amenaza con extenderse por la región de la mano de Hugo Chávez (quien también resucita un cierto cesarismo militar) y las expectativas no colmadas por la economía de libre mercado abren paso a regresiones intervencionistas en lo económico<sup>5</sup>. Las preocupaciones de Krauze —un impenitente liberal mexicano— no incorporaban la amenaza del narcotráfico, que en su país ha causado entre 23.000 y 28.000 muertes sólo en los últimos dos años, a cuenta de la guerra abierta por los cárteles de la droga entre sí y contra el Gobierno Federal<sup>6</sup>.

Para Joaquín Estefanía el panorama latinoamericano es tan decepcionante como que se trata de una democracia electoral que no llega a ser una democracia ciudadana. Este periodista desgrana un listado de déficits democráticos (de ciudadanía social, de ciudadanía civil, de ciudadanía política, de frustración provocada por el fracaso de las reformas económicas, de debilidad estatal que abre la puerta a nuevos poderes fácticos, y de corrupción) como los siete pecados capitales de América Latina. La ausencia de seguridad social, los recortes a la libertad de expresión, los ataques a la propiedad y la inseguridad de los marcos jurídicos, el débil desempeño de la economía —que engendra marginalidad, pobreza y desigualdad—, la legalidad mafiosa que se aprovecha de la debilidad y la escasa implantación del Estado en vastas regiones, así como la irrupción de nuevos poderes fácticos (como lobbies empresariales, el narcotráfico o poderosos grupos de comunicación), sumados a la persistente corrupción, componen un escenario poco halagüeño donde sobrevive una democracia de muy baja calidad<sup>7</sup>.

Por su parte, Jorge Castañeda expone la dramática deriva que está tomando el juego político latinoamericano actual, polarizado en dos bloques. Por un lado, un conjunto de países que, si bien presentan opciones ideológicas diversas, responderían al modelo democrático liberal: México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil; por otro, los populismos que se encolman tras el experimento de Hugo Chávez en Venezuela: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, [Paraguay], donde también se incluye Argentina. Para Castañeda se trata de dos bloques enfrentados en un combate ideológico, político y económico de consecuencias inciertas y peligrosas. Según este autor, el «bloque populista» correría con ventaja: más homogéneo, con un objetivo claro (extender su idea de la revolución y el socialismo a lo largo y ancho del subcontinente), cuenta con asistencia militar extranjera (de Rusia) y una visión estatista de la economía, que lo hace anti-liberal y anti-norteamericano. Castañeda teme el potencial disruptor y destabilizador que inyecta en la región el bloque populista (en particular de cara a las relaciones con Estados Unidos y al acoplamiento en una economía cada vez más

5. KRAUZE, Enrique: «América Latina: los paradigmas de su atraso», *El País*, 15 noviembre 2003, p. 13.

6. CAMARENA, Salvador: «Calderón llama a la unidad de México contra el 'narco'», *El País*, 3 setiembre 2010, p. 5.

7. ESTEFANÍA, Joaquín: «Los siete pecados capitales de América Latina», *El País*, 22 abril 2004, p. 13.

internacionalizada), pero omite que su gran atractivo deriva de las insuficiencias de su adversario, la democracia liberal, uno de cuyos puntos más cuestionados es la falta de políticas sociales para mitigar el desempleo, la pobreza y la marginalidad a la que parecen condenados amplios sectores sociales<sup>8</sup>.

Finalmente Joaquín Villalobos, un hombre con pasado guerrillero en tierras centroamericanas, traza un panorama casi dantesco donde América Latina aparece atravesada por un nuevo tipo de guerra (que nada tiene que ver con la lucha armada emprendida por los movimientos de liberación de los 70, y sí con las «nuevas guerras» definidas por Mary Kaldor para los 90), caracterizada por una violencia fragmentada, multidireccional, sin reglas, sin propósito claro y sostenida por una economía informal-criminal. Se trataría de una guerra civil continental contra el crimen organizado (con la producción y tráfico de drogas a la cabeza), las pandillas urbanas, la delincuencia común y la violencia social. Casi ningún país escapa a este dramático desafío: Brasil está en guerra contra pandillas que dominan grandes zonas urbanas; Guatemala y Honduras están fragmentadas por poderosas mafias; la costa atlántica de Nicaragua es un narcoterritorio; Colombia combate contra guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha que ahora son narcotraficantes; en El Salvador, las *maras* superan en número a las guerrillas de los años 80; México tiene seis Estados en emergencia intervenidos por fuerzas federales; y el mayor peligro de la transición cubana no es una guerra entre cubanos, sino que el crimen organizado tome el control de la isla. En medio del caos reinante se ha producido una lumpenización de la violencia de izquierda y el veterano combatiente advierte contra la tentación de abrazar la violencia revolucionaria de otros tiempos: el romanticismo guerrillero de las viejas izquierdas es ahora reaccionario. En cambio, recomienda paciencia, paz y legalidad a los sectores progresistas de la región<sup>9</sup>. Es decir, perseverar en el camino de la democracia. Pero aquí se abre un dilema: ¿cómo conjugar la hegemonía de ésta con el panorama que acabamos de exponer —entre la decepción y el infierno bélico—? O formulado de otro modo: ¿qué posibilidades tiene la democracia realmente existente de superar los retos colosales que hemos descrito? Se impone a nuestro juicio una historización de la última oleada democrática tal como arraigó en América Latina para reevaluar sus posibilidades y sus límites.

## 2. VOLVER A LAS TRANSICIONES...

Un ejercicio útil es regresar a los contextos, motivaciones y causas que abrieron la puerta a la recuperación de la democracia: el tiempo de las transiciones. Hoy podríamos afirmar que hubo en la coyuntura de cambio político un exceso de optimismo respecto a lo que se podría conseguir con el nuevo régimen,

8. CASTAÑEDA, Jorge: «La batalla por América Latina», *El País*, 6 marzo 2007, p. 13.

9. VILLALOBOS, Joaquín: «Nuevas guerras y viejas izquierdas», *El País*, 29 setiembre 2007, p. 13.

alimentado por factores diversos: las penurias de las condiciones de vida bajo las dictaduras precedentes —en particular, bajo los inéditos mecanismos de represión implementados por varios países de la región—, la maltrecha situación económica que ya no pudo disfrazarse tras el estallido de la crisis de la deuda externa, las expectativas por recuperar las libertades públicas, la resurrección de la actividad cultural que podía adivinarse en el ocaso de los regímenes autoritarios, etc. Estas ilusiones (más o menos ancladas en la experiencia), se conjugaron extrañamente con un discurso político que, al mismo tiempo que las reforzaba, proponía y publicitaba una versión de la democracia más formalista que sustancial. Como advierte Alan Knight frente al sorpresivo y fulgurante adiós a regímenes autoritarios entre 1978 y 1990 (República Dominicana, Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Chile y Nicaragua): «debemos recordar que los procesos de democratización han sido típicamente encerrados con ‘candado’». Con esto se refería a las condiciones impuestas por las dictaduras para preservar su legado: «incluyen tanto *candados políticos* (...) (por ejemplo, las provisiones constitucionales de Chile, que protegen a Pinochet y al ejército), como *candados económicos*, destinados a asegurar la inamovilidad de los principios de libre mercado y a prevenir un regreso al ‘populismo económico’ (de ahí, políticas de privatización, acuerdos de libre comercio, restricciones al poder de los sindicatos, establecimiento de bancos centrales independientes)»<sup>10</sup>. Knight enuncia claramente cómo el abandono del poder por los militares ha estado acompañado por políticas diseñadas para eliminar las razones originales que motivaron la intervención militar (radicalismo, marxismo, «populismo económico», sindicalismo militante, movilización campesina, amenazas al ejército como institución. «Fue la reacción en contra de la posibilidad del socialismo la que culminó en el presente “Termidor” en América Latina», escribía Fernando Henrique Cardoso en 1979. Y añade Knight:

En verdad, hasta se ha sugerido que los recientes estudios sobre la democratización (...) al mismo tiempo encarnan y dan su sello de aprobación a este proceso de «candado». En efecto, Paul Cammack afirma: «O'Donnell y Schmitter... dejan perfectamente en claro (tal como Linz y Stepan) que ellos han preferido dar más importancia a la estrategia de la élite por sobre la estructura porque la democracia sólo funcionará si la capacidad de las fuerzas de izquierda y de la clase trabajadora para conformarla está limitada»; por ende, concluye Cammack, su «neutra contribución a la ciencia política» es, de hecho, «una intervención altamente ideológica en la política contemporánea»<sup>11</sup>.

No es menor esta observación. Efectivamente, los autores que más han influido con sus ideas sobre el proceso político latinoamericano, O'Donnell, Schmitter y Whitehead por un lado, Huntington por otro, proponen un diseño institucional

10. KNIGHT, Alan, «Las tradiciones democráticas y revolucionarias en América Latina», *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*, 1, 2003, pp. 38-39.

11. Citado en KNIGHT, Alan: «Las tradiciones democráticas y revolucionarias en América Latina», *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*, 1, 2003, p. 40.

que deja poco margen a procesos genuinos de democratización<sup>12</sup>. En su afán por no despertar a la bestia amansada de los militares y sus corifeos (temiendo una involución autoritaria) clausuran la posibilidad de tomar las medidas encaminadas a alcanzar los objetivos de una democracia de calidad (el imperio de la ley y la rendición de cuentas en aras de conquistar valores sustantivos como la libertad y la igualdad; políticas públicas que satisfagan a la ciudadanía, como piedra angular de la legitimidad del sistema, entre los más importantes)<sup>13</sup>.

En el análisis de casos que sustenta este artículo<sup>14</sup> y que ha procurado ir integrando las diversas regiones del subcontinente, se constata lo siguiente: en ningún país de América Latina la transición a la democracia significó un desafío abierto al statu quo heredado de los militares. Todos los primeros gobiernos «democráticos» estuvieron encabezados por partidos o coaliciones de centro derecha o claramente de derecha, que respetaron escrupulosamente dos cosas del régimen anterior: 1. No cuestionar la acción de los militares (sus responsabilidades en la violación de los derechos fundamentales de las personas, que fue una de las condiciones que impusieron los uniformados para abandonar el poder); y 2. No cuestionar el modelo de sociedad que habían implantado las Fuerzas Armadas (entendiendo por modelo el tipo de imbricación entre Estado, economía y sociedad)<sup>15</sup>. La única excepción a este panorama fue el gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) en Argentina, encabezado por Raúl Alfonsín: éste sí desafió la herencia de la dictadura; fue exitoso en la restauración de las libertades públicas (en poner coto al Terrorismo de Estado y sentarlo en el banquillo) pero fracasó estrepitosamente en lo demás. A pesar del Juicio a las Juntas, los militares

12. O'DONELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. y WHITEHEAD, Laurence: *Transiciones desde un gobierno autoritario. 2 América Latina*. Paidós: Barcelona, 1986; HUNTINGTON, Samuel P: *La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona: Paidós, 1994.

13. A propósito de una glosa de Enrique Gil Calvo a MORLINO, Leonardo: *Democracia y democratizaciones...*, en «El 'caso Gürtel': un test de calidad democrática», *El País*, 8 octubre 2009, p. 27.

14. Que corresponde al Proyecto de investigación «Historia comparada de las transiciones a la democracia: España, Argentina y Uruguay (1968-1990)» (HUM 2007-65645/HIST, Ministerio de Ciencia e Innovación). Investigador principal: Guillermo Mira Delli-Zotti.

15. Para República Dominicana se puede consultar: PEDROSA, Fernando: *Los límites del voluntarismo. La Internacional Socialista (IS) en América Latina*. Salamanca: tesis doctoral, 2009, pp. 291-300 y 316-324; para Ecuador, SÁNCHEZ, FRANCISCO: *¿Democracia no lograda o democracia malograda? Un análisis del sistema político del Ecuador: 1979-2002*. Quito: FLACSO-Instituto de Iberoamérica, 2008; para Perú: COTLER, Julio, «Las intervenciones militares y la «transferencia del poder a los civiles» en Perú», en O'DONNELL, Guillermo y otros, *op.cit.*, pp. 238-257; para el caso boliviano: DUNKERLEY, James: *Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982*. La Paz: Plural, s/f; para Argentina, NUN, José y Juan Carlos Portantiero (comps.): *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*. Buenos Aires: Puntosur, 1987; sobre Uruguay: CAETANO, Gerardo y RILLA, José: *Breve historia de la dictadura (1973-1985)*. Montevideo: Eds. Banda Oriental, 2005; una excelente visión comparada de los procesos de transición en el Cono Sur y Centroamérica se encuentra en: BARAHONA DE BRITO, Alexandra; AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen (eds.): *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*. Madrid: Istmo, 2002; específicamente sobre las transiciones en Centroamérica se puede consultar: TORRES RIVAS, Edelberto: «Democracias de baja intensidad». En: CASAUS ARZÚ, M. E. y CASTILLO QUINTANA, R. (coords.): *Centroamérica. Balance de la década de los 80. Una perspectiva regional*. Madrid: CEDEAL, 1993, pp. 75-88.

podieron defender su impunidad (exceptuando la cúpula de los Comandantes y algunos casos puntuales), casi hasta la actualidad. Por lo demás, el gobierno de Alfonsín, a pesar de proponer un modelo socialdemócrata de gasto público keynesiano, muy pronto tuvo que implantar un plan de ajuste heterodoxo y después se fue deslizado hacia una ortodoxia neoliberal (no llegó a concretarla por el marasmo económico que lo obligó a ceder anticipadamente el poder, y las reformas centrales fueron ejecutadas por el Gobierno de su sucesor, Carlos Menem)<sup>16</sup>.

A la vista de lo expuesto, es conveniente descartar las transiciones como punto de inflexión en la historia reciente del subcontinente. Una historización de los procesos democráticos permitirá superar los espejismos que supone considerar la oposición dictadura-democracia como el quiebre significativo para una interpretación del cambio en la región<sup>17</sup>. Por consiguiente, la periodización propuesta se abriría con una primera etapa que llamaremos «la gran transición», trazando un arco temporal desde aproximadamente 1968-69 hasta 1990. Esta «gran transición» vino precedida por la impaciencia ante los magros frutos de la modernización y la aceleración de la perspectiva revolucionaria a finales de los años 60. Acontecimientos de diverso signo imprimieron vértigo a este efímero ciclo rupturista: desde el asalto al poder de un conjunto de movimientos nacionalistas y reformistas, liderado por militares que buscan el gobierno con el explícito propósito de transformar —en términos favorables a los sectores populares, campesinos e indígenas— el statu quo en países como Perú, Panamá, Bolivia y Ecuador, entre 1968 y 1972; pasando por la formación de movimientos guerrilleros urbanos en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, y englobando también el triunfo de la Unidad Popular de Salvador Allende, con su proyecto de vía pacífica al socialismo.

Este ciclo, exuberante por el ascenso imparable de la retórica revolucionaria, la polarización ideológica y el fervor de las masas (a pesar de la desaparición física del Che Guevara y el discreto retiro de Fidel Castro como pirómano de la revolución) muy pronto se estrelló ante un pico extremo de violencia contrarrevolucionaria, cuyo furor no decayó hasta que los Banzer, Bordaberry y su corte militar, Pinochet, Videla o Ríos Montt dieran un fuerte correctivo a las sociedades infectadas —según ellos— por la subversión comunista; entonces y debido a una compleja combinación de factores locales e internacionales (entre los primeros,

16. PUCCIARELLI, Alfredo (coord.): *Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI, 2006; ALFONSÍN, Raúl: *Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos*. Buenos Aires: FCE, 2004; GARGARELLA, Roberto; MURILLO, María Victoria y PECHENY, Mario (comps.): *Discutir Alfonsín*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010.

17. Discutiendo la temporalidad de la *Historia del presente*, Luciano Alonso avanza en una dirección similar: «Personalmente no comparto la identificación de Aróstegui de un tiempo axial hacia 1989-1991 y prefiero defender la posibilidad de pensar como matriz histórica [de la Historia del presente] la constitución de un modo de dominación especular en las áreas con procesos de centro y la nueva externalización de la violencia hacia las áreas con procesos de periferia entre 1950-1970...». En: ALONSO, Luciano, «Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica», *Prehistoria*, 11, 2007, p. 199, nota 7.

el desprestigio de los militares por el carácter inhumano de la represión y el deficiente manejo de la economía), las dictaduras fueron cediendo a procesos de transición a la democracia; hasta encadenar finalmente un periodo hegemonizado por regímenes políticos neoliberales (con excepción de Cuba). De modo que la «gran transición» abarcaría dos fases: una fase A, correspondiente a «la larga década» de los setenta (1968/9 a 1982); y una fase B, que remite propiamente a las transiciones a la democracia (década de 1980).

Asumiendo esta perspectiva, las transiciones democráticas constituirían la fase amable de un profundo cambio estructural cuyos patrones se habían fijado antes del advenimiento de las democracias. Así, las democracias vinieron a legitimar y continuar las tendencias (en lo que se refiere al diseño económico-social) implantadas por los gobiernos autoritarios. Siguiendo a Marcelo Cavarozzi, la transición política en realidad veló un doble proceso, una doble transición: más allá de la política, otra, desde una matriz estado-céntrica a una economía de libre mercado (de cuño neoliberal). Cavarozzi lo enunciaba en 1991, advirtiendo sobre la necesidad imperativa de reconstruir la autoridad pública y emprender así una profunda reconstrucción del Estado, para devolverle operatividad real<sup>18</sup>. Hoy podemos afirmar que el modelo neoliberal se impuso en todos los frentes; por consiguiente, la transición dominante fue aquella desde una matriz estado-céntrica a un modelo de libre mercado. Esto último fue lo que predominó y la transición a la democracia se subordinó a este otro fenómeno. La consecuencia del predominio de la transición a un nuevo modelo de acumulación supuso la apertura de una nueva fase para el ejercicio de la democracia.

Esta segunda etapa se extendió desde 1989/90 hasta unos años antes del cambio de siglo, digamos entre 1997 y 1998, y la llamaremos «democracia neoliberal». Arranca con la aplicación a rajatabla de la ortodoxia neoliberal y llega hasta una crisis multidimensional (provocada por ella misma) que afectó a la mayoría de los países latinoamericanos en un arco temporal coincidente con el cambio de siglo.

A partir del Consenso de Washington, la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la URSS y el fin de la Guerra Fría, se impusieron la ortodoxia y el dogmatismo neoliberal en todo el mundo. También en América Latina y por métodos democráticos: Salinas de Gortari ganó las elecciones en México (aunque posiblemente a través del fraude), pero fueron inobjectables los triunfos de Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Melo en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela (quien soportó el «Caracazo» a cuenta del ajuste económico exigido por los organismos financieros internacionales) o Alberto Fujimori en Perú. Bolivia ya se había pasado al neoliberalismo desde el gobierno de Víctor Paz Estensoro y su NPE (Nueva Política Económica), ejecutada por el super-ministro de Economía,

18. CAVAROZZI, Marcelo: «Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina», *Revista de Estudios Políticos*, 74, 1991, pp. 85-111.

Gonzalo Sánchez de Losada; y los países de América Central estaban transitando por el mismo camino<sup>19</sup>.

La traducción del «Fin de Historia» de Francis Fukuyama en América Latina fue el triunfo de la «utopía neoliberal». La aplicación del neoliberalismo en el subcontinente (en su forma más radical) tuvo una corta (pero muy intensa) duración, con resultados ambiguos, contradictorios y polémicos. En el *haber* se suelen contabilizar: la estabilización de la macroeconomía de los países latinoamericanos (control de la inflación, reducción del déficit fiscal y equilibrio del presupuesto, retorno de la inversión extranjera, etc.); en el *debe* suelen figurar: aumento del desempleo y debilitamiento de las clases medias, aumento de la pobreza y la desigualdad, redistribución negativa del ingreso y concentración del poder económico<sup>20</sup>.

En la segunda mitad de la década de 1990 se desató una crisis multidimensional que se iría resolviendo con la búsqueda de alternativas a esta «democracia neoliberal». A continuación presentamos una cronología sobre los efectos políticos provocados por ese cataclismo:

- 1997 crisis político-institucional en Ecuador
- 1998 Triunfo de Hugo Chávez en Venezuela
- 2000 Triunfo de Ricardo Lagos en Chile
- 2001 Crisis del corralito en Argentina
- 2002 Triunfo de Lula en Brasil
- 2003 Triunfo de Kirchner en Argentina
- 2004 Triunfo del FA en Uruguay
- 2005 Triunfo de Evo Morales en Bolivia
- 2006 Triunfo de Michele Bachelet en Chile
- 2006 Triunfo del FSLN en Nicaragua
- 2008 Triunfo de Rafael Correa en Ecuador
- 2009 Triunfo de Fernando Lugo en Paraguay
- 2009 Triunfo de Mauricio Funes en El Salvador

Entramos así en la tercera y última etapa, que se extiende hasta el presente y puede recibir distintas denominaciones: «búsqueda de alternativas a la democracia neoliberal», «refundación democrática» o «segunda transición». ¿Cuáles podrían ser los factores que nutren las alternativas políticas surgidas en América Latina (que de un modo un tanto reduccionista se conoce como «giro a la izquierda») a partir de la crisis de Ecuador en 1997 y el ascenso de Chávez en Venezuela en 1998?

Como casi siempre, se trataría de una combinación de factores, comenzando por la propia inviabilidad social del proyecto neoliberal a medio plazo. Muchos expertos opinan que el neoliberalismo es contrario a la democracia, porque la

19. TORRE, Juan Carlos: *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*. Buenos Aires: Paidós, 1998.

20. BULMER-THOMAS, Victor (comp.): *El nuevo modelo económico en América Latina. Su efecto en la distribución del ingreso y en la pobreza*. México: FCE, 1997.

economía de libre mercado en estado puro tiende a la desigualdad y, por lo tanto, es una amenaza a la libertad general y a la igualdad de derechos para todos los ciudadanos<sup>21</sup>. A este problema fundamental se le fueron sumando otros: la profunda crisis de representación y el desprestigio en el que cayeron los partidos políticos tradicionales, la emergencia de nuevos movimientos sociales, fincados algunos de ellos en señalamientos de carácter étnico, y las consiguientes reformas institucionales que les permitieron saltar a la política; el auge del indianismo —que extrae de la defensa del patrimonio cultural autóctono y la resistencia a la globalización neoliberal un poderoso aglutinador—, etc. Todos ellos constituyen factores de peso, pero nosotros quisiéramos llamar la atención sobre el papel que ha desempeñado la memoria histórica en los últimos años como un elemento capaz de cuestionar el presente desde su evocación del pasado. En el siguiente apartado exploraremos ese despertar memorialístico en los países de América Latina; y hasta qué punto, al modificar los imaginarios sociales sobre el pasado, está incidiendo sobre la agenda política y la elaboración de políticas públicas que afectan los contenidos de la democracia.

### 3. MEMORIAS DE LA VIOLENCIA Y REINVENCIÓN DE LA DEMOCRACIA

En referencia a la memoria histórica, Carlos Degregori hace las siguientes precisiones glosando a Elizabeth Jelin: 1) «Entender las memorias como procesos subjetivos, anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales. 2) Reconocer a las memorias como objeto de disputas y batallas, lo cual apunta a prestar atención al papel activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones de poder. 3) La necesidad de «historizar» las memorias, o sea, reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como en el lugar asignado a las memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de luchas políticas e ideológicas»<sup>22</sup>.

La irrupción en la esfera pública de la memoria sobre la violencia dictatorial ha incorporado nuevas interpretaciones que buscan deslegitimar o deconstruir los relatos dominantes (el sentido común oficial) sobre lo que pasó durante los «años turbulentos», pero también sobre lo que aconteció en tiempos más remotos. Y esto permite a la vez, fundamentar políticas públicas diferentes, tal vez un nuevo proyecto social, incluso nuevas concepciones sobre la práctica de la política.

Dentro del panorama latinoamericano nos enfrentamos a situaciones muy heterogéneas, para cuyo análisis proponemos el estudio de casos, primando la

21. GRAY, John: *Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global*. Barcelona: Paidós, 2000; LUTTWAK, Edward: *Turbocapitalismo. Quiénes ganan y quiénes pierden en la globalización*. Barcelona: Crítica, 2000; STIGLITZ, Joseph E.: *El malestar en la globalización*. Madrid: Taurus, 2002.

22. DEGREGORI, Carlos I.: *Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú*. Lima: IEP-Social Science Research Council, 2003, p. 21.

perspectiva regional. Probablemente el Cono Sur haya sido el lugar donde la memoria histórica irrumpió con más fuerza. En Argentina, el «recalentamiento memorialístico» tuvo antecedentes puntuales, pero puede datarse en torno a 1996, a partir de la multitudinaria conmemoración del 20º aniversario del golpe de Estado. Sólo desde ese momento la memoria de las víctimas como militantes comenzó a abrirse hueco en la esfera pública. Argentina experimentaba «el retorno de lo reprimido». Al reconocimiento público de que los militares habían arrojado prisioneros vivos al mar, el surgimiento de HIJOS o el empuje incombustible de las Madres de la Plaza de Mayo, se empezaron a sumar testimonios, entrevistas, memorias de antiguos militantes, que venían a contar otra historia y que terminaron por sepultar el relato de la lucha contra la subversión, la guerra sucia y sus excesos que habían popularizado los militares. En realidad, los grandes relatos que habían circulado hasta ese momento (la versión militar y la teoría de los dos demonios abanderada por el Nunca Más) quedaron seriamente cuestionados. Se abrió una coyuntura por la que se coló la reactivación de los juicios contra los represores, primero en Madrid —movidos por antiguos exiliados en la capital española— y luego en la propia Argentina, conocidos como Juicios por la Verdad<sup>23</sup>. El deterioro de la situación económica y la «crisis del corralito» desplazaron momentáneamente pero no quitaron brillo a esta nueva atmósfera sobre cómo evocar el pasado represivo. Después de ganar las elecciones de 2003, Néstor Kirchner acometió una serie de medidas audaces y de fuerte valor simbólico: recibió oficialmente al ala más combativa de las Madres de Plaza de Mayo; relevó a los jueces de la Corte Suprema vinculados a la corrupción durante la etapa menemista; derogó las Leyes de Impunidad que habían bloqueado el castigo a los militares responsables por violaciones contra los derechos humanos (incluidos los Comandantes indultados por el ex presidente Menem); convirtió el predio que ocupaba la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros de detención bajo la dictadura, por el que pasaron cerca de 5000 detenidos y muy pocos sobrevivieron) en Museo de la Memoria; mostró mayor sensibilidad hacia la condición de los antiguos exiliados retornados, como víctimas colaterales del terrorismo de Estado. Estas políticas de la memoria y la identificación con la generación de los 70, permitió al Gobierno al menos dos cosas: primero, reforzar notablemente su apoyo social (había sido elegido con el 23% de los votos) al proyectar una imagen de regeneración institucional, reformas en una dirección anti-neoliberal, etc.; segundo, borrar el pasado de Kirchner como gobernador bajo la década neoliberal y cortar el cordón umbilical que lo vinculaba con el menemismo. Durante el gobierno de su esposa, Cristina Fernández, se reanudaron los juicios contra militares y policías que habían ejercido la represión ilegal

23. ANGUITA, Eduardo y CAPARRÓS, Martín: *La Voluntad. Una historia de la militancia en la Argentina 1966-1973*. Buenos Aires: Norma, 1997; MAS, Fernando: *De Nuremberg a Madrid. Historia íntima de un juicio*. Buenos Aires: Grijalbo, 1999; ANGUITA, Eduardo: *Sano Juicio*. Buenos Aires: Sudamericana, 2001; FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela: *La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina (a Pablo)*. Buenos Aires: Sudamericana, 2009; JENSEN, Silvina: *Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura*. Buenos Aires: Sudamericana, 2010.

especialmente fuera de Buenos Aires, en ciudades más pequeñas de la Argentina y otros asuntos vinculados con el «Proceso» —que el tiempo parecía haber sepultado— saltaron nuevamente a la palestra (en particular, la relación de los grandes grupos de comunicación con la dictadura).

En Chile, la detención de Pinochet en Londres y la sentencia de un Tribunal británico imputándole crímenes de lesa humanidad derrumbaron para siempre la imagen del dictador asociada a una actuación «salvacionista». Digamos que la dictadura de Pinochet quedó confinada a la historia de la infamia, pese a la voluntad de sus más fanáticos seguidores (en las elecciones de 2000, un delfín de Pinochet, Joaquín Lavín, estuvo a punto de derrotar al socialista Ricardo Lagos; para no perjudicar sus opciones, Lavín —alcalde del distrito más acomodado de Santiago, Las Condes—, no mencionó a Pinochet en toda su campaña).

La detención de Pinochet en Londres reactivó los juicios contra la dictadura en el propio Chile (a cargo del juez Guzmán); Ricardo Lagos ganó la presidencia y ordenó el Informe Valech (sobre la tortura); empezó a desmoronarse el sistema de enclaves autoritarios legados por la Constitución de 1980; las Fuerzas Armadas pidieron perdón por sus actuaciones violando la legalidad y Michel Bachelet ganó la presidencia y dejó como legado un Museo de la Memoria que cuenta una contra-historia respecto a la que se venía difundiendo desde 1973. Aún en Chile, escaparate del éxito del neoliberalismo en América Latina (el único que citan con entusiasmo los expertos), las memorias sobre el pasado traumático y su disputa en la esfera pública continúan teniendo incidencia sobre el desenvolvimiento de la política<sup>24</sup>.

Uruguay se distancia de Argentina en algunos aspectos, pero tiene convergencias en otros. Durante la transición a la democracia el tema de los derechos humanos fue muy tenue respecto al país vecino, y pareció extinguido con la derrota del referéndum de 1989 (que pretendía abolir la Ley de Caducidad de la capacidad punitiva del Estado). Sin embargo, casos como la búsqueda de la nieta de Juan Gelman o la aparición de Simón Riquelme, 25 años después de haber sido arrebatado a su madre biológica, lo reactivaron. Este tema adquirió su mayor centralidad coincidiendo con la «crisis del corralito» en Argentina y sus fuertes repercusiones en el Uruguay. De manera que las políticas liberalizadoras de Jorge Battle, más la tremenda sacudida de 2002 y 2003 provocada por la crisis económica, crearon la coyuntura idónea para que el Frente Amplio arrasara en las elecciones de 2004 y por primera vez una fuerza política de izquierda gobernara el Uruguay. En los últimos seis años, bajo los gobiernos frenteamplistas de Tabaré Vázquez y José Mujica, se fue abriendo trabajosamente un debate respecto al pasado. A veces el tema arroja signos contradictorios: si por un lado en el referéndum de octubre 2009 fue ratificada la Ley de Caducidad, por otro, la llegada

24. SZNAJDER, Mario: «Memoria y política en el Chile redemocratizado». En: GROPPPO, Bruno y Flier, Patricia (comps.): *La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay*. La Plata: Al Margen, 2001, pp. 179-194; LIRA, Elizabeth y LOVEMAN, Brian: *Políticas de reparación. Chile 1990-2004*. Santiago de Chile: LOM, 2005; STERN, Steve J.: *Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas de Londres 1998*. Santiago de Chile: Ed. Universidad Diego Portales, 2009.

de José Mujica (antiguo líder de los Tupamaros) a la presidencia de la República en 2009, nos habla de un vuelco bastante espectacular de la opinión pública respecto del pasado conflictivo de los 70<sup>25</sup>.

En los países centroamericanos las transiciones a la democracia fueron parte de una estrategia contrainsurgente diseñada por los militares y amparada por Estados Unidos para ganar la guerra y, por sobre todo, contener la amenaza que suponía la revolución sandinista. De manera que el «giro a la democracia» (de carácter claramente instrumental) tuvo lugar bajo el conflicto armado y no coincide con los procesos de paz. Sólo en 1992 se acordó la pacificación de El Salvador y, por presión internacional, se constituyó una Comisión de la Verdad. En lo referente a Guatemala, hoy se conoce que la transición a la democracia se superpuso con la coyuntura más terrible de violación contra los derechos humanos; sólo a partir de 1996 cesó formalmente el conflicto armado y también —como veremos en seguida— se dispuso abrir una comisión para echar luz sobre el pasado traumático. En cuanto a Nicaragua, domina un cierto consenso para situar la transición cuando Violeta Chamorro derrotó a los sandinistas en las elecciones de 1990. Tanto la revolución que acabó con la tiranía de Somoza en 1979, como el retorno al poder de Daniel Ortega en 2006 y su nueva etapa de gobierno son temas de acalorado debate<sup>26</sup>.

En El Salvador, la creación de una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU brotó tanto del desplome del comunismo como referente para el movimiento insurgente, como de la desilusión por parte de Estados Unidos en relación con la ineptitud y corrupción del ejército salvadoreño —incapaz de ganar la guerra pese a toda la ayuda recibida—, opinión compartida por las élites empresariales locales que empezaban a resentirse del despilfarro y la violencia incontrolada sembrada por las Fuerzas Armadas. Con absoluto rigor e imparcialidad, la Comisión se dedicó a examinar los episodios de violencia denunciados tras los doce años de guerra civil, estableció conexiones significativas, trazó una fenomenología y cronología de los hechos y concluyó que el 95% de las graves violaciones contra los derechos humanos que estos episodios comportaron (masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas), debían adjudicarse a las fuerzas de seguridad y policía del estado salvadoreño, y a grupos paramilitares que actuaron con total impunidad bajo su protección. Hay que destacar el ensañamiento de las

25. SILVA SCHULTZE, Marisa: *Qué hacer con lo no dicho*. Montevideo: Santillana, 1999; RONIGER, Luis, «Olvido, memoria colectiva e identidades: Uruguay en el contexto del Cono Sur». En: GROPPPO, Bruno y FLIER, Patricia (comps.): *La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay*. La Plata: Al Margen, 2001, pp. 151-178; MARTÍNEZ, José Jorge: *Crónicas de una derrota. Testimonio de un luchador*. Montevideo, Trilce, 2003; GIGLIO, María Esther: *Pepe Mujica. De tupamaro a ministro*. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005; DUTRÉNIT BIELOUS, Silvia: *El Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, escenarios*. Montevideo: Trilce, 2006; GALLEGOS-DÍAZ, Soledad: «El presidente guerrillero», *El País*, 6 diciembre 2009, p. 17.

26. Los núcleos argumentales para el istmo centroamericano han sido tomados de SIEDER, Rachel: «Políticas de guerra, paz y memoria en América Central». En: BARAHONA DE BRITO, Alexandra; AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen (eds.): *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*. Madrid: Istmo, 2002. cap. V, pp. 247-284.

fuerzas oficialistas contra diversas dignidades eclesiásticas, como ilustran el asesinato del sacerdote Rutilio Grande, el perpetrado contra monseñor Óscar Arnulfo Romero (arzobispo de San Salvador) o la matanza de los jesuitas que dirigían la Universidad Centroamericana<sup>27</sup>.

El Informe presentado en marzo de 1993 resultó demoledor en cuanto a los datos recopilados: además de probar la implicación estatal directa en la ejecución y difusión de la violencia, y desentrañar la génesis y metodología de los «escuadrones de la muerte», reveló la identidad de muchos de los responsables, entre ellos el ex mayor Roberto D'Aubuisson, quien aparecía como instigador de los asesinatos de Romero, Ellacuría y sus compañeros de la Universidad; el mismo D'Aubuisson que había sido uno de los fundadores de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, el partido ultraderechista que pilotó la transición en los 80) y llegó a presidir por unos años el parlamento del país. Cinco días después de que la ONU hiciera público el Informe, el presidente Alfredo Cristiani (de ARENA) promulgó la amnistía general que tenía previamente anunciada para apaciguar al Ejército, muchos de cuyos miembros aparecían relacionados con los peores crímenes de la represión. Pero como la amnistía se mantiene hasta la actualidad, El Salvador respondería al modelo de «transición sin justicia»<sup>28</sup>.

El triunfo de Mauricio Funes en las elecciones de 2009, dando por primera vez el gobierno al hasta entonces opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, no prefigura un cambio radical respecto a los silencios del pasado, pero abre algunas esperanzas en la búsqueda de una democracia más genuina, especialmente para los más desfavorecidos. Uno de los primeros gestos del flamante presidente fue viajar a Estados Unidos para solicitar la desclasificación de documentos del Departamento de Estado en relación con el asesinato de Ellacuría y sus compañeros. En paralelo, en la Audiencia Nacional de Madrid, familiares de los jesuitas de nacionalidad española buscan el amparo de la justicia. El resultado de las demandas es incierto: El Salvador se debate contra retos gigantescos y urgentes, como una cada vez más extendida violencia, delictiva y anómica, alimentada por la actividad del narcotráfico y la expansión del pandillismo juvenil (las maras). Pero el Informe de la Comisión de la Verdad consiguió doblegar la tentación del olvido e imaginar cauces para los reclamos de justicia.

Guatemala, aún bajo circunstancias parecidas, presenta sus propias especificidades; por ejemplo, aquí se elaboraron dos informes tratando de captar la deriva histórica que habría conducido hasta los «años de plomo»<sup>29</sup>. A partir de 1985, la nueva Constitución Nacional y las elecciones —diseñadas y controladas por la cúpula militar como parte del plan contrainsurgente—, constituyeron la base para una transición pactada que culminó formalmente en 1996 con la suscripción

27. «De la locura a la esperanza. La guerra de doce años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad», *ECA. Estudios Centroamericanos*, 533, 1993, pp. 161-326.

28. GARCÍA, Prudencio: «El Salvador, 30 años de penosa impunidad», *El País*, 27 agosto 2010, p. 27.

29. El que elaboró la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, *Recuperación de la memoria Histórica. Guatemala, Nunca Más*, bajo la dirección de Monseñor Gerardi, culminó con el asesinato del prelado a los pocos días de su presentación.

de la Paz Firme y Duradera entre el Ejército y la guerrilla. Hay que señalar que —a diferencia de El Salvador— las organizaciones armadas llegaron muy debilitadas a las negociaciones, pese a lo cual y por presión internacional, se creó una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Comisión de la Verdad que concluyó su informe en 1999 poniendo al descubierto las graves limitaciones de la democracia guatemalteca si no se emprendían reformas de gran calado. La Comisión dejó bien asentado que entre 1981 y 1983, en determinadas regiones de Guatemala, agentes del Estado cometieron actos de genocidio en el marco de un conflicto armado interno. Este se habría prolongado durante 36 años, con el saldo de unas 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, el 95% de ellas contabilizadas entre 1978 y 1984. La CEH asignó una responsabilidad del 93% de las violaciones a las fuerzas del Estado y, específicamente, un 85% al Ejército. Estimó que más del 80% de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia pertenecían a alguna etnia maya y que la violencia durante los años más duros de la represión fue ejercida sobre todo en el Altiplano indígena<sup>30</sup>.

De la investigación realizada por la CEH se derivan una serie de factores que no sólo ayudan a explicar la ferocidad del conflicto reciente, sino que proponen nuevas visiones sobre la historia de Guatemala. Julieta Rostica los resume como sigue: el grado de movilización y organización de las masas campesinas e indígenas (más allá del voluntarismo guerrillero); las desavenencias entre la cúpula económica empresarial y los sectores militares, y la crisis política ocasionada enfrentamientos en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero toda la violencia descargada sobre la población civil (especialmente contra los sectores indígenas) no encontraría lógica sin apelar a la larga historia de racismo y exclusión que arrasaba el país: a diferencia de otros países de América Latina, que promovieron un proyecto de nación homogénea o mestiza, en Guatemala las élites intelectuales y políticas apostaron «al modelo de una nación eugenésica para mejorar la raza y blanquearla. El pensamiento racial con base en el discurso degenerativo fortaleció la percepción del otro en términos de su peligrosidad. Probablemente, la representación hegemónica del indio es aquella que lo sitúa tras la montaña, que establece la certeza de su presencia invisible a los sentidos y proclive a tornarse visible el día de su venganza. Esta representación tiene dos consecuencias directas: fomenta el miedo de la población no indígena y la deshumanización o satanización del indígena»<sup>31</sup>.

En definitiva, si bien el Proceso de Paz puso sobre la mesa las aberraciones cometidas por el Estado y las demandas del movimiento maya, éstas y otras reivindicaciones (como la necesidad de una reforma agraria para dar oxígeno a los cientos de miles de campesinos sin tierra) cayeron en el olvido cuando el proyecto de reformas constitucionales fue rechazado en el referéndum de 1999. Se puede concluir entonces que, a pesar de que el régimen democrático funciona en

30. ROSTICA, Julieta: «Guatemala después del genocidio», *Puentes*, 21, 2007, pp. 32-36.

31. *Ibidem*, p. 34.

Guatemala desde hace un cuarto de siglo, coexisten junto a él (e incluso bajo su amparo) viejos rezagos del autoritarismo, otros tipos de violencia (crimen e inseguridad callejera), corrupción y narcotráfico<sup>32</sup>.

#### EPÍLOGO: LA EXCEPCIONALIDAD BRASILEÑA

Brasil desafía claramente la hipótesis que hemos planteado acerca de una cierta relación entre la interpelación memorialística hacia el pasado dictatorial, y en consecuencia, la aparición de fisuras e impugnaciones severas a la versión sobre los gobiernos militares como algo inevitable e incluso necesario (que habría que confinar rápidamente al baúl de los recuerdos) que avalaría la resignada aceptación de sus consecuencias; y la implementación de políticas públicas destinadas, si no a castigar a los responsables del autoritarismo, por lo menos a reparar material y simbólicamente a sus víctimas en nombre de la democracia. En comparación con sus vecinos, Brasil parece haber mostrado muy poco interés por revisar los años bajo gobierno militar. Y aunque continúan aflorando evidencias sobre la brutalidad que alcanzó la represión, en los últimos meses una iniciativa para abolir la ley de amnistía aprobada por los militares en 1978 (en realidad, una autoamnistía), no ha prosperado, mientras «los archivos de la dictadura militar se pudren en un edificio de Brasilia»<sup>33</sup>.

En casi todo lo demás, la trayectoria de Brasil fue similar a la de sus vecinos conosureños: durante 21 años los militares ejercieron el poder sin cortapisas, tras lo cual sobrevino una transición pactada, más controlada aún de lo que los propios militares habían diseñado, puesto que el candidato opositor ganó las elecciones pero murió sin poder asumir el cargo, y su vicepresidente, José Sarney —convertido por el destino en primer mandatario de la democracia— había sido un notable protagonista del partido militar<sup>34</sup>. Por su parte el Congreso, ya en democracia, refrendó la polémica ley de Amnistía para los torturadores. «No fue ninguna imposición de los militares, fue un acto soberano del Congreso

32. Por razones de espacio tenemos que omitir las consecuencias (muy significativas por cierto) de la irrupción de la memoria histórica en los países andinos. La constitución de un fuerte movimiento indígena como actor principal en la política ecuatoriana, así como el triunfo del MAS encabezado por Evo Morales en Bolivia, responden al despertar de una conciencia histórica que aspira a remover las lacras del colonialismo. En Perú, la década de la violencia protagonizada por Sendero Luminoso también ha dado lugar a una minuciosa reconstrucción de los hechos y a una reflexión crítica que, sin embargo, está lejos de tener un impacto importante sobre la opinión pública, al menos hasta ahora. Una buena introducción a estos temas se puede encontrar en: VAN COTT, Donna: «Los movimientos indígenas y sus logros: la representación y el reconocimiento jurídico en los Andes», *América Latina Hoy*, 36, 2004, pp. 141-159; y PÁSARA, Luis (ed.): *Perú en el siglo XXI*. Lima: Pontificia Universidad Católica, 2008.

33. ARIAS, Juan: «Los archivos de la dictadura militar se pudren en un edificio de Brasilia», *El País*, 3 julio 2010, p. 8.

34. GUILHERME MOTA, Carlos y LÓPEZ, Adriana: *Historia de Brasil. Una interpretación*. Salamanca: Eds. Universidad Salamanca, 2009, cap. 29, pp. 623-632.

democrático. Fue una anomalía de Brasil en comparación con otros países como Argentina, Chile o Uruguay, donde la sociedad fue mucho más dura con los militares (...) Lo que es increíble es que los militares, ni siquiera los de hoy, hayan tenido el coraje de pedir perdón al país por los horrores cometidos<sup>35</sup>.

Sin embargo, pese a esta vergonzante amnesia hacia el pasado y a una transición que supuso, en muchos aspectos, una plácida prolongación del régimen anterior (los ciudadanos no elegían directamente el cargo presidencial y el sucesor de Sarney, Fernando Collor de Melo, era un conspicuo representante del establishment político y mediático más conservador)<sup>36</sup>, Brasil aparece hoy como el país latinoamericano que experimentó los cambios más espectaculares en las últimas décadas, donde se advierten genuinos avances democráticos que están beneficiando a vastos sectores de su populosa sociedad. ¿A qué atribuir esta singularidad brasileña? No, desde luego, *sólo* al advenimiento de la democracia. Por el contrario, habría que señalar otros factores que han contribuido decisivamente a que Brasil pueda ir dejando atrás lastres estructurales vinculados al subdesarrollo que compartía con sus vecinos de continente: desigualdad y discriminación social, pobreza, desequilibrios económicos y regionales, inseguridad, crimen, violencia social, etc.

Nada de esto está completamente superado, pero el país rebosa optimismo y se perfila como algo más que una potencia intermedia, el único país de América Latina capaz de competir en el comercio internacional con bienes manufactureros, intensivos en tecnología, dotado de una industria informática nacional, productor de buques y aviones de combate, y que cuenta con una diplomacia sofisticada y preparada para planificar a largo plazo...

La llegada de la democracia contribuyó a que los elementos responsables de este salto hacia delante fuesen más operativos, pero no los engendró. En nuestro análisis, cuatro elementos estarían en la base de la democratización de la sociedad y el sistema político brasileños: la constitución de un partido de izquierda, de masas, como el PT (Partido de los Trabajadores); en segundo lugar, la emergencia del Movimiento de los Sin Tierra, que nuclea a trabajadores del campo y campesinos propietarios de pequeños fundos; tercero, el desarrollo del movimiento a favor de la «negritud»; y finalmente, el liderazgo político que en los últimos 16 años han encarnado sucesivamente los presidentes Fernando Cardoso y Luis Ignacio «Lula» da Silva. Esta constelación de factores, que viene operando de manera acumulativa desde por lo menos finales de la década de 1960, no ha estado presente en ninguna otra sociedad latinoamericana y ha permitido convertir a Brasil en una potencia regional con perspectivas de jugar un papel preponderante en el plano internacional.

35. Declaraciones de Carlos Fico, catedrático de Historia y director del Departamento de Metodología de la Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en «Los archivos de la dictadura...», *El País*, 3 julio 2010, p. 8.

36. MAYORGA, René A: *Antipolítica y neopopulismo*. La Paz: CEBEM, 1995, cap. III, pp. 40-48; BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos: «La paradoja de la izquierda en Brasil». En: PÉREZ HERRERO, Pedro (ed.): *La izquierda en América Latina*. Madrid: Ed. Pablo Iglesias, 2006, pp. 217-252.

El surgimiento y desarrollo del PT ha sido fruto de una larga política industrialista que el país había iniciado por lo menos 30 años antes (hacia los años 40). Getulio Vargas y Juscelino Kubitschek pusieron las bases, pero el «milagro brasileño» fue acelerado y patrimonializado por la dictadura militar (1964-1985), que exhibió los éxitos de una modernización capitaneada por las industrias metal-mecánica y automotriz, al mismo tiempo que ocultaba los elevados costes sociales y medioambientales de la operación. La conjunción entre concentración industrial, dictadura militar, reclamos salariales y combates por la libertad sindical fue la forja donde nació el PT, un partido obrero que tenía como referente ideológico el socialismo pero nunca se dejó atrapar por el dogmatismo de ninguno de los pequeños partidos de clase presentes ya en Brasil. Además, el carisma y la capacidad organizativa de su jefe, Luis Ignacio da Silva, «Lula», y la flexibilidad para establecer alianzas por fuera del movimiento obrero, le permitieron articular una vasta organización que tuvo sus principales aliados en los sindicatos estatales y en el campesinado<sup>37</sup>.

Precisamente un segundo elemento que hace de Brasil un caso excepcional es la fuerza y organización de un movimiento campesino que lucha por su reconocimiento y dignidad en el panorama nacional. Siendo la distribución y control sobre los recursos naturales un problema común y un condicionante fortísimo que ha lastrado las posibilidades de desarrollo industrial en América Latina, y siendo también que el escenario de minifundios inviables económicamente y trabajadores campesinos sin tierra es una realidad cotidiana a lo largo y ancho de las Américas (excluimos naturalmente a Estados Unidos y Canadá), solo en Brasil ha surgido un movimiento fuertemente articulado que afronta el problema de la tierra. Promovido desde la Iglesia católica y su «Pastoral de la Tierra», esta organización comenzó a funcionar en 1985 como resultado del resurgir del movimiento rural operado entre 1978 y 1984. Desde su primer Congreso Nacional (1985), el MST (Movimiento de los Sin Tierra) dejó claros sus objetivos: 1) demanda de tierras para sus afiliados con el fin de emplazar las villas de reforma agraria (en cuyo seno se ha venido produciendo un notable proceso de recreación de identidades campesinas); 2) reorientación —a medio plazo— de la política agraria hacia el mercado interno y 3) demanda al Estado de una profunda reorganización de la propiedad privada de la tierra, que limite los latifundios a 500 hectáreas (hoy los hay de millones) y expropie las empresas multinacionales.

Si bien hasta el momento los resultados no han sido espectaculares (aunque sí se ha registrado una modesta distribución de la propiedad a favor de familias campesinas), a través de sus tomas de tierras, manifestaciones de diversa índole en el espacio público, y alianzas políticas (especialmente a través de su apoyo crítico al PT), el Movimiento de los Sin Tierra ha logrado sensibilizar a la sociedad y a la clase política brasileña sobre las necesidades y carencias del mundo rural<sup>38</sup>.

37. FAUSTO, Boris: *Brasil, de Colonia a Democracia*. Madrid: Alianza, 1995, pp. 267-271; 278.

38. DE LA FONTAINE, Dana: «El campesinado latinoamericano en tiempos de la globalización. Respuestas y propuestas del Movimiento Sin Tierra en Brasil». En: DE LA FONTAINE, Dana y APARICIO, Pablo C.

En tercer lugar, hay que destacar la actuación del movimiento negro a favor de la igualdad de los descendientes africanos víctimas de la esclavitud hasta muy avanzado el siglo XIX. En los últimos años ha habido una profesionalización de la militancia negra, que está en la base de la política gubernamental a favor de proyectos de acción afirmativa. La vieja utopía de la «democracia racial» que concibiera Gilberto Freyre en la década de 1930 comenzó a ser desmontada por Florestan Fernandez en los años 60, pero fue con la redemocratización del país cuando el resurgir del Movimiento Negro Unificado (que había sido fundado en 1978) impuso como consigna «derrocar el mito de la democracia racial»<sup>39</sup>. Las reivindicaciones políticas de la negritud, impulsadas por idearios panafricanistas y afro-centristas, junto con el multiculturalismo norteamericano, fueron conquistando espacios institucionales desde el fin de la presidencia de José Sarney, quien creó la Fundación Palmares, el primer órgano Federal para asuntos especiales de la población negra en Brasil. Con la penalización del racismo y el reconocimiento de las comunidades de quilombos a favor de sus propietarios (descendientes de esclavos cimarrones), la Constitución de 1988 dio otro paso hacia la igualdad racial, que alcanzaría importantes conquistas en las dos décadas siguientes, pasando por el Programa Nacional de Derechos Humanos de 1996 (diseñado para desarrollar acciones afirmativas a favor de los negros) hasta llegar a las políticas de cuotas que se están aplicando en la actualidad, y cuyo origen están en el Estatuto de la Igualdad Racial, presentado en 1998 al Congreso por un diputado del PT<sup>40</sup>.

Finalmente, en la confluencia de factores que han llevado a Brasil mucho más lejos que sus vecinos en el proceso de democratización, no habría que desdeñar la calidad del liderazgo político, que ha tenido desde 1994 en Fernando Henrique Cardoso e Ignacio «Lula» da Silva dos personalidades con sentido de Estado, realismo político y una fuerte sensibilidad social.

---

(comps.): *Diversidad cultural y desigualdad social en América Latina y el Caribe: desafíos de la integración global*. El Salvador: Fundación Heinrich Böll, 2008, pp. 267-293.

39. HOFBAUER, Andreas: «En torno a la institucionalización del antirracismo en Brasil: contextos y estrategias». En: DE LA FONTAINE, Dana y APARICIO, Pablo C. (comps.): *Diversidad cultural y desigualdad social en América Latina y el Caribe: desafíos de la integración global*. El Salvador: Fundación Heinrich Böll, 2008, pp. 227-241.

40. *Ibidem*, pp 236-238.